

**“ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ARGENTINA Y COLOMBIA:
DESAFÍOS Y AVANCES EN LA ERA DE LA PANDEMIA Y LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA AL 2023”**

Esperanza Camelo Gómez

RESUMEN

Este estudio se enfoca en la evaluación de la gestión pública eficiente en naciones de América Latina, poniendo especial atención en Argentina y Colombia. Teniendo en cuenta los retos emergentes en años recientes, como la crisis de COVID-19 y el avance de la administración digital hasta 2023, se explica cómo estos elementos han afectado la eficacia de la administración pública en la región. En relación al contexto, se inspecciona el marco jurídico y los principios que dirigen la gestión pública en Argentina y Colombia, subrayando la relevancia de la transparencia, la eficacia y la participación de los ciudadanos. Se discute el efecto de la pandemia en la provisión de servicios públicos y la puesta en marcha de medidas de urgencia.

La metodología empleada es de carácter cualitativo y descriptivo, utilizando análisis de documentos y revisión de jurisprudencia para valorar la implementación de la gestión pública eficiente en ambos países. Se toman en cuenta ejemplos concretos de buenas prácticas y obstáculos encontrados en la puesta en práctica de la administración digital, como la protección de información y la accesibilidad. Para concluir, se demuestra la importancia de adaptar los modelos de gestión pública a las necesidades actuales, dando prioridad a la innovación tecnológica y la actualización de los procesos administrativos. Se resalta la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para asegurar una gestión efectiva y centrada en el servicio público en Argentina, Colombia y otros países de América Latina.

PALABRAS CLAVE: Buena Administración, Administración Electrónica, Pandemia, Covid-19, Función Pública

ABSTRACT

This study focuses on the evaluation of efficient public management in Latin American nations, paying special attention to Argentina and Colombia. Taking into account emerging challenges in recent years, such as the COVID-19 crisis and the advancement of digital administration until 2023, it explains how these elements have affected the effectiveness of public administration in the region. In relation to the context, the legal framework and principles that guide public management in Argentina and Colombia are inspected, highlighting the relevance of transparency, effectiveness and citizen participation. The effect of the pandemic on the provision of public services and the implementation of emergency measures is discussed.

The methodology used is qualitative and descriptive in nature, using document analysis and review of jurisprudence to assess the implementation of efficient public management in both countries. Specific examples of good practices and obstacles encountered in the implementation of digital administration are taken into account, such as information protection and accessibility. To conclude, the importance of adapting public management models to current needs is demonstrated, giving priority to technological innovation and updating administrative processes. The need to strengthen transparency and accountability mechanisms is highlighted to ensure effective management focused on public service in Argentina, Colombia and other Latin American countries.

KEYWORDS: Good Administration, Electronic Administration, Pandemic, Covid-19, Public Service

INTRODUCCIÓN

El ámbito público juega un papel esencial en las operaciones de una nación, actuando como el eje central de las actividades del gobierno. En América Latina, naciones como Argentina y Colombia han afrontado una serie de retos en los últimos años, como la crisis de COVID-19 y la transición hacia una gestión más digitalizada. Estos obstáculos han examinado la habilidad de adaptación y la eficacia de la administración gubernamental.

En Argentina, se ha notado un enfoque proactivo en la mejora de la administración pública. Se ha dado prioridad a la simplificación de los trámites burocráticos con la finalidad de lograr una gestión más eficaz que facilite las interacciones entre el gobierno y los ciudadanos (Matilla, 2019). La implementación de mejores prácticas ha sido fundamental en este proceso, buscando optimizar la eficiencia y la transparencia en las tareas gubernamentales. La administración gubernamental eficiente, se ha vuelto una necesidad en un contexto global marcado por cambios veloces y complejidades, y Argentina no es la excepción. La necesidad de adaptarse a situaciones cambiantes, como las impuestas por la pandemia, ha llevado a una revisión de las estrategias y políticas gubernamentales. La incorporación de tecnologías digitales ha jugado un papel crucial en esta transición, permitiendo una mayor agilidad y capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad.

La simplificación de la administración gubernamental busca mejorar tanto la eficiencia interna como la experiencia de los ciudadanos en sus interacciones con las entidades gubernamentales. Facilitar los procedimientos y disminuir la burocracia son elementos esenciales de este enfoque, promoviendo una mayor participación ciudadana y una percepción positiva del papel del gobierno. Por tanto, los recientes retos como la pandemia y la transición digital, han generado una reflexión profunda sobre el ámbito público en América Latina, especialmente en

países como Argentina. La implementación de mejores prácticas y la simplificación de la administración gubernamental son pasos esenciales hacia una gobernanza más eficaz y eficiente, asegurando que el gobierno esté preparado para afrontar desafíos emergentes y satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad (Portal oficial del Estado argentino, 2017).

En Colombia, se ha realizado un esfuerzo incesante para actualizar la gestión gubernamental, enfocándose en cuatro elementos esenciales: optimizar la estructura institucional, el rendimiento de los sectores e instituciones, la profesionalización en las entidades estatales y el acceso a la educación y formación en asuntos públicos (Vicente y Babino, 2023). Ante esta emergencia, los gobiernos han tenido que tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a sus ciudadanos, adaptando sus operaciones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. La rápida adaptación ha sido crucial, demostrando una notable capacidad de ajuste en estructuras y procesos gubernamentales. Un aspecto esencial que ha surgido es la aceleración hacia una administración digital en la región, liderada por países como Chile, México y Brasil. Esta transición ha permitido mejorar la comunicación interna, coordinar esfuerzos de manera más eficiente y asegurar una respuesta ágil ante la pandemia (Martínez, 2020).

La digitalización ha simplificado la administración interna y fortalecido la relación entre gobiernos y ciudadanos, proporcionando información actualizada sobre medidas de prevención y directrices gubernamentales. La crisis del COVID-19 ha catalizado la transformación en la administración pública en América Latina, con la adopción de enfoques innovadores y la consolidación de la administración digital como elementos clave para una respuesta efectiva y sostenible. A pesar de los desafíos, como la persistente pandemia de COVID-19, los países latinoamericanos están aprendiendo valiosas lecciones y haciendo progresos significativos, como la adopción extendida de la facturación electrónica, que contribuye a la reducción del fraude y la

evasión fiscal, y a una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental (Martínez, 2020).

METODOLOGÍA

Este estudio adoptará una metodología cualitativa y un enfoque jurídico descriptivo para examinar la administración pública en Argentina y Colombia, con un enfoque particular en los retos y progresos en la era de la pandemia y la administración electrónica hasta 2023. La metodología se dividirá en tres etapas clave: revisión bibliográfica, análisis comparativo y conclusiones.

La revisión bibliográfica es un componente esencial en la investigación cualitativa. Se realizará un análisis exhaustivo y sistemático de la literatura relacionada con la administración pública, la gestión gubernamental, los retos y progresos en Argentina y Colombia, así como el impacto de la pandemia y la implementación de la administración electrónica en ambos territorios hasta 2023. Se intentará cubrir una amplia variedad de fuentes primarias y secundarias, incluyendo libros, artículos académicos, informes gubernamentales, documentos legislativos y jurisprudencia relevante.

Después de recopilar la información pertinente, se llevará a cabo un análisis comparativo de la administración pública en Argentina y Colombia. Este análisis se centrará en identificar los desafíos comunes que ambos países han enfrentado en la gestión gubernamental durante la pandemia, así como los avances logrados en la implementación de herramientas de administración electrónica. Se prestará especial atención a las similitudes y diferencias en los marcos normativos, políticas públicas y prácticas administrativas en ambos países.

Por último, se formularán conclusiones basadas en los resultados obtenidos durante la revisión bibliográfica y el análisis comparativo. Se resaltarán los principales desafíos que la

administración pública en Argentina y Colombia ha enfrentado en el contexto de la pandemia, así como los avances realizados en la implementación de soluciones de administración electrónica. Además, se sugerirán recomendaciones para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión gubernamental en ambos países, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y las mejores prácticas identificadas durante la investigación.

RESULTADOS

Capítulo 1: La buena administración pública en el derecho comparado Latinoamericano:

Argentina y Colombia

1.1 Argentina

El propósito de la buena Administración, es alcanzar una administración pública de alto nivel que mejore específicamente las condiciones de existencia de los ciudadanos y asegure la satisfacción de sus necesidades grupales, así como el crecimiento sostenible de la sociedad. Esto conlleva la modernización del Estado y los procesos administrativos, enfocándose en la dimensión social del ser humano y abordando los desafíos comunes de manera dinámica, inclusiva y cooperativa (Matilla, 2019). De este modo, se basa en el ciudadano, no en la autoridad, dando prioridad a las relaciones jurídicas públicas hacia el individuo y su crecimiento sostenible, así como la promoción de su dignidad. Para lograr esto, se busca evitar el conflicto mediante herramientas que promuevan la reconciliación de intereses a través del diálogo, consensos, pactos y procedimientos de negociación, arbitraje y conciliación. Es esencial establecer un proceso administrativo que promueva la coexistencia, la cooperación y una participación efectiva de los ciudadanos en el gobierno (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), 2021).

En este sentido, en Argentina, la gestión pública eficaz se basa en diversas normativas y leyes significativas. Sobresalen la Ley de Ética en el Desempeño del Cargo Público (Ley N° 25.188), que impone deberes a los que desempeñan el cargo público, como acatar la Constitución y las leyes, comportarse con integridad y dar prioridad al interés general sobre el personal. La Ley 25.164 de 1999 establece un marco normativo exhaustivo para el empleo público, tratando

términos y condiciones, requisitos de admisión, relación laboral, sistema de carrera administrativa, régimen disciplinario y formación (Matilla, 2019).

Esta ley garantiza la transparencia y la equidad en la administración de recursos humanos, especifica claramente los criterios de acceso al empleo público, fija los derechos y deberes de los empleados y del Estado, y fomenta la profesionalización del sector. También incluye un régimen disciplinario estricto y un fondo constante de formación.

El Decreto 891/2017 apoya la simplificación administrativa en el Sector Público Nacional, buscando acelerar procesos y disminuir la burocracia. Fomenta la eficiencia, la transparencia y el servicio al ciudadano, con directrices claras para simplificar procesos, adoptar prácticas eficientes y tecnologías avanzadas. Su meta es modernizar y mejorar continuamente el sector público, alineado con principios de eficiencia y servicio al ciudadano, buscando optimizar la experiencia del ciudadano al interactuar con el gobierno (Matilla, 2019).

1.2 Colombia

En Colombia, el gobierno se establece como una república descentralizada y fortalecida, resaltando su condición de Estado social de derecho. A diferencia de México, que sigue un modelo federado, en Colombia existe un sistema legal unificado que cubre todo el territorio nacional, con una única constitución y leyes uniformes que regulan varios aspectos. Esta particularidad del ordenamiento jurídico colombiano no solo se basa en su unidad, sino también en la falta de división normativa en todo el país. La consistencia jurídica fomenta la cohesión y la igualdad en la aplicación de las leyes, garantizando una base natural firme para todos los ciudadanos, independientemente de su localización geográfica (Grau, 2021).

Aunque el derecho a una administración pública eficiente no está explícitamente reconocido como un derecho humano o fundamental en la legislación colombiana, varias

disposiciones constitucionales enfatizan la importancia de asegurar dicho derecho. El marco del Estado social de derecho implica la obligación de las autoridades de proporcionar servicios públicos eficientes, transparentes y orientados al bienestar de la población (Grau, 2021).

Dentro del contexto jurídico colombiano, se resalta la necesidad de tener un gobierno eficaz, responsable y en constante progreso. Se considera que una administración pública apropiada es esencial para garantizar el respeto de los principios de justicia, equidad y participación ciudadana establecidos en la Constitución (Escobar, 2023). De esta forma, la ley apoya de manera indirecta el derecho a una administración pública eficiente, vital para el crecimiento equilibrado de la sociedad.

De este modo, la estructura normativa de Colombia, como Estado social de derecho, se distingue por su conjunto de normas coherentes y la relevancia que da a una administración pública eficaz. Aunque este derecho no esté reconocido explícitamente como fundamental, su importancia se refleja en disposiciones constitucionales que buscan asegurar un gobierno que cumpla con las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos en todo el país (Arcila y López, 2019).

El artículo 2 de la Constitución colombiana establece los objetivos fundamentales del Estado, que incluyen la participación de todos en las decisiones que les afectan, permitiendo así la intervención activa de los ciudadanos en la administración pública, en línea con la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Además, el artículo 23 consagra el derecho de petición como un medio de comunicación vital entre los ciudadanos y la administración. Aunque no se menciona explícitamente el derecho a una buena administración pública, la Constitución, junto con la Ley 1755 de 2015 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece principios que rigen la actuación

administrativa. Estos principios, como el debido proceso, igualdad, imparcialidad, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia y eficacia, proporcionan mecanismos para que los ciudadanos participen de manera activa y protejan sus intereses, asegurando que la administración pública sirva al interés general (Arcila y López, 2019).

Capítulo 2: La operación de la buena administración en torno a la evolución digital, como la buena administración electrónica, en Argentina y Colombia

La administración electrónica, también denominada e-gestión o gobierno digital, es una estrategia revolucionaria que promueve la actualización constante de las infraestructuras gubernamentales a nivel mundial. Su implementación ha tenido un impacto significativo en la eficacia, transparencia y accesibilidad de los servicios públicos, convirtiéndose en un elemento esencial en la búsqueda de una administración pública más efectiva y centrada en el ciudadano. Tanto en Argentina como en Colombia, se han realizado varios esfuerzos y políticas para impulsar esta transformación digital, reconociendo su capacidad para mejorar la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, así como para fomentar la innovación y la rapidez en los procedimientos administrativos (Amado, 2021).

En **Argentina**, la gestión digital ha ganado un impulso notable, caracterizado por una serie de iniciativas estratégicas que han cambiado el escenario gubernamental. En este marco, sobresale el Plan Nacional de Gobierno Digital, también conocido como Agenda Digital 2030, que se ha implementado con el objetivo principal de coordinar y fortalecer las acciones del Estado en el campo de las tecnologías digitales. Este plan integral abarca múltiples aspectos, desde el fomento del desarrollo económico hasta la promoción de la inclusión digital para todos los ciudadanos argentinos, sin olvidar la misión prioritaria de construir una administración pública eficaz, rápida y, sobre todo, centrada en las necesidades de los ciudadanos (Gobierno de Argentina, 2018).

Un elemento crucial que ha fortalecido este proceso de digitalización gubernamental es la promulgación de marcos jurídicos específicos, entre los que destaca la Ley de Firma Digital (Ley 25.506). Esta legislación es un hito importante al dar validez a las transacciones realizadas en

entornos digitales, proporcionando así un fuerte respaldo judicial a las operaciones realizadas a través de medios electrónicos. La Ley de Firma Digital no solo reconoce, sino que también establece las condiciones necesarias para el uso de la firma electrónica y la firma digital, garantizando su eficacia y seguridad jurídica a nivel nacional.

Los esfuerzos realizados en este campo han llevado a la creación de varias plataformas y portales gubernamentales, diseñados con el propósito de simplificar el acceso a la información y la realización de trámites de forma remota. Estas herramientas digitales no solo han optimizado los procesos administrativos, sino que también han contribuido significativamente a la reducción de la carga burocrática para los ciudadanos, promoviendo así una interacción más rápida, transparente y eficiente entre el Estado y la sociedad (Jara, 2019).

En este sentido, en Argentina el progreso hacia la gestión electrónica ha sido un proceso esencial en la actualización del sector gubernamental, apoyado por un robusto marco regulatorio. Este marco jurídico ha sido crucial para promover políticas de renovación administrativa dentro del gobierno nacional. La esencia de este proceso radica en una serie de leyes y decretos que forman lo que ahora se conoce como el nuevo derecho administrativo digital. Este conjunto de regulaciones no solo ha establecido las bases jurídicas para la implementación de sistemas de administración documental electrónica, sino que también ha otorgado validez a estos sistemas, proporcionándoles una base normativa sólida (Pardin, 2016).

Uno de los progresos más notables dentro de esta transformación ha sido la adopción de la facturación digital. Este cambio ha revolucionado la forma en que se emiten los recibos de venta en el país. La implementación de la facturación digital no solo ha simplificado los procesos administrativos para las empresas, sino que también ha mejorado la eficiencia y transparencia en las transacciones comerciales. Además, esta modalidad ha permitido un mayor control y

seguimiento por parte de las autoridades fiscales, contribuyendo así a la lucha contra la evasión fiscal y promoviendo un ambiente empresarial más justo y equitativo (Pardin, 2016).

Por otro lado, en Colombia, la administración electrónica ha experimentado un progreso notable impulsado por la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que establece directrices para la implementación de sistemas digitales en la gestión pública. A través de programas como el Gobierno en Línea, se ha incentivado la digitalización de los servicios gubernamentales, buscando mejorar la eficacia y la transparencia en la administración pública. Además, se ha fomentado la adopción de herramientas tecnológicas que permitan la interoperabilidad entre las diferentes entidades gubernamentales, facilitando la coordinación y el intercambio de información en beneficio de los ciudadanos (Tello, 2020).

En Colombia, se ha observado un avance considerable en términos de la normativa y aplicación de la democracia electrónica, respaldado por un uso cada vez más extenso y eficaz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte del gobierno. Esta incorporación de las TIC ha tenido un impacto extremadamente positivo en la calidad de la democracia en el país, estableciendo un hito importante en su progreso hacia formas más eficaces y accesibles de participación ciudadana en los procesos gubernamentales. Uno de los elementos más sobresalientes de estos progresos se encuentra en la consolidación de la administración electrónica, un fenómeno que ha favorecido una constante actualización de las estructuras administrativas públicas. Esta actualización se concreta en la implementación efectiva de un portal único del Estado Colombiano, diseñado con el objetivo principal de simplificar el acceso a la información, los procedimientos, los servicios y los trámites que los ciudadanos deben realizar ante las diferentes entidades gubernamentales relevantes. Esta plataforma centralizada representa un paso de gran importancia hacia la promoción de la

transparencia, la eficiencia y la accesibilidad en la interacción entre los ciudadanos y el Estado (Tello, 2020).

La creación de este portal único no solo facilita el acceso a los recursos y servicios gubernamentales, sino que también contribuye a una mayor cohesión y coherencia en la gestión administrativa, reduciendo la duplicidad de esfuerzos y optimizando los recursos públicos. Además, al proporcionar un punto de acceso unificado, se promueve la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, fortaleciendo así los fundamentos de la democracia participativa en Colombia.

La transición hacia una administración electrónica también implica una mejora notable en la capacidad de respuesta del gobierno a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Al agilizar los procesos administrativos y reducir los tiempos de espera, se promueve una mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, lo que a su vez contribuye a mejorar la percepción de la calidad del gobierno por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, la consolidación de la administración electrónica y la implementación del portal único del Estado Colombiano representan un avance significativo en el fortalecimiento de los principios democráticos en el país. Al promover la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana, estas iniciativas no solo mejoran la calidad de la democracia, sino que también contribuyen al desarrollo integral y sostenible de Colombia en el contexto global de la era digital (Escobar, 2022).

Por consiguiente, la gestión digital se presenta como una herramienta poderosa y revolucionaria que impulsa la modernización y eficiencia de las administraciones públicas en todo el mundo. En países como Argentina y Colombia, la adopción de políticas y marcos judiciales específicos refleja el compromiso de los gobiernos hacia esta transformación digital. Estas medidas promueven una gestión más ágil, transparente y centrada en el servicio al

ciudadano. No obstante, es crucial continuar avanzando en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas robustas. La formación de los funcionarios públicos y la promoción de la cultura digital son aspectos fundamentales para garantizar el aprovechamiento total de las oportunidades que ofrece la gestión digital. El objetivo final es construir sociedades más inclusivas y eficientes.

Los avances en la administración electrónica en Argentina y Colombia representan un paso significativo hacia la modernización y eficiencia de los servicios públicos. Estos progresos mejoran la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, facilitando el acceso a los servicios y mejorando la calidad de los mismos. Además, la transformación digital en la administración pública no solo mejora la eficiencia interna, sino que también puede aumentar la transparencia, mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza del público en el gobierno. Al hacer que la información gubernamental sea más accesible y comprensible, la gestión digital puede empoderar a los ciudadanos, permitiéndoles participar más plenamente en la sociedad y en el proceso democrático.

Capítulo 3: Actualidad de la buena administración pública, teniendo en cuenta los desafíos presentados en los últimos años con ocasión de la Pandemia, en Argentina y Colombia

En el periodo más crítico de la pandemia de COVID-19, que sacudió al mundo entero, la gestión gubernamental de Argentina se vio sumergida en una serie de desafíos sin precedentes. Al mismo tiempo, este periodo también trajo consigo la identificación de oportunidades de acción valiosas y significativas. Durante los años 2020 y 2022, Argentina implementó una serie de políticas y estrategias con el objetivo principal de mitigar la propagación del virus. Entre estas políticas, se destacan las medidas de aislamiento y distanciamiento social, que se convirtieron en herramientas fundamentales en la lucha contra la pandemia.

Estas acciones, que fueron impulsadas tanto por el sector público como por el privado, condujeron a una transformación notable y significativa en la forma en que se llevaban a cabo las actividades laborales. Se observó un marcado incremento en el empleo de modalidades de trabajo a distancia, una tendencia que abarcó tanto al sector privado como al ámbito de la Administración Pública Nacional. Esta adaptación al trabajo remoto no solo permitió la continuidad de las actividades laborales en medio de las restricciones impuestas por la pandemia, sino que también abrió nuevas posibilidades y oportunidades para la eficiencia y la flexibilidad en el mundo del trabajo. Así, en medio de la crisis, Argentina demostró su capacidad para adaptarse y responder a los desafíos presentados por la pandemia de COVID-19 (Sabatto, 2022).

La transformación a la que se hace referencia desencadenó una serie de consecuencias significativas para los empleados. Estos se encontraron en la necesidad de adaptarse a una nueva dinámica laboral que surgió de manera sorpresiva e inesperada. Este cambio abrupto y repentino implicó modificaciones sustanciales en la manera en que se realiza el trabajo cotidiano. Para entender mejor este fenómeno, se realizaron un total de 209 entrevistas a trabajadores de diversas

áreas y entidades gubernamentales. El objetivo principal de estas entrevistas era analizar y comprender sus puntos de vista y perspectivas con respecto al trabajo remoto, un modelo de trabajo que ha emergido recientemente (Silva, 2021).

Durante estas entrevistas, se exploraron tanto los aspectos positivos como los negativos que los entrevistados identifican en este nuevo modelo de trabajo. Se abordaron temas como la productividad, la salud laboral, el equilibrio entre la vida personal y profesional, entre otros. Además, se examinó el impacto del trabajo remoto en múltiples dimensiones de la práctica laboral. También se indagó sobre las expectativas de los trabajadores en relación con la evolución futura de esta modalidad laboral. Se buscó entender cómo ven el futuro del trabajo remoto y cómo creen que este puede evolucionar con el tiempo. Esta información es crucial para poder adaptarse a los cambios y prepararse para el futuro del trabajo. De esta forma, la transformación mencionada ha tenido un impacto profundo en la forma en que los empleados llevan a cabo su trabajo. A través de las entrevistas realizadas, se pudo obtener una visión más clara de las ventajas y desventajas del trabajo remoto, así como de las expectativas de los trabajadores para el futuro de esta modalidad laboral (Sabatto, 2022).

En su detallado estudio sobre las repercusiones de la pandemia en la gestión pública, el Dr. Gustavo E. Silva Tamayo subraya la urgente necesidad de tratar los Derechos Humanos, especialmente el derecho a la vida y a la salud, como mandatos esenciales que los Estados deben esforzarse por maximizar en la mayor medida posible. Esta perspectiva enfatiza la relevancia de una gestión pública efectiva y eficiente para asegurar la protección de estos derechos fundamentales en periodos de crisis como el que estamos experimentando.

Las transformaciones y retos que emergen a causa de la pandemia no solo impactan el ámbito de la salud pública, sino que también representan una oportunidad inigualable para

robustecer las bases de nuestra soberanía científico-tecnológica. Este aspecto se establece como un pilar esencial para el avance social y económico a nivel nacional, especialmente en un contexto global donde el saber juega un papel cada vez más determinante en la solución de los desafíos emergentes.

La pandemia ha resaltado la relevancia de la capacidad científica y tecnológica de un país para afrontar crisis sanitarias y otros retos globales. En este sentido, la inversión en investigación, desarrollo e innovación se transforma en un factor clave para reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y fomentar un desarrollo sostenible a largo plazo. Además, la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades impuestas por la pandemia ha impulsado la transformación digital en varios sectores de la gestión pública. La implementación de herramientas tecnológicas y la digitalización de procesos se han vuelto imprescindibles para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y facilitar la interacción entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales (Silva, 2021).

En consecuencia, la pandemia ha generado cambios profundos en la gestión pública y ha planteado retos significativos, pero también ha proporcionado una oportunidad inigualable para robustecer nuestra soberanía científico-tecnológica y reafirmar el compromiso con los Derechos Humanos. La capacidad de adaptación y la voluntad de aprovechar estas oportunidades serán cruciales para construir un futuro más resiliente y equitativo en el ámbito nacional e internacional.

Por su parte, la gestión gubernamental en Colombia ha sido desafiada por una serie de retos significativos en tiempos recientes, entre los que destaca la aparición de la pandemia de COVID-19. Este suceso ha tenido un efecto considerable en la funcionalidad y en la administración de los fondos estatales, creando una situación sin precedentes que demanda

soluciones rápidas y eficientes por parte de las instituciones gubernamentales en todos los niveles de gobierno.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha alterado profundamente la estructura social y económica del país, poniendo a prueba la capacidad de las instituciones públicas y requiriendo una adaptación sin precedentes en la forma en que se manejan los recursos y se proporcionan los servicios públicos. La necesidad de implementar medidas de distanciamiento social, limitaciones a la movilidad y cierres de actividades económicas ha generado una presión adicional sobre las instituciones gubernamentales, que se han visto forzadas a reevaluar sus estrategias y prioridades para enfrentar esta situación de crisis (Hernández y Agudelo, 2021).

En este escenario, se ha vuelto esencial que las autoridades públicas adopten acciones rápidas y efectivas para asegurar la continuidad de los servicios esenciales, proteger la salud y el bienestar de la población y atenuar los impactos económicos negativos causados por la pandemia. Además, la gestión eficaz de los recursos públicos se ha convertido en un reto aún mayor, dado el aumento de la demanda de servicios sociales y de salud, así como la necesidad de implementar programas de apoyo económico para sectores vulnerables y afectados por la crisis (Ramírez, 2023).

En este sentido, la capacidad de adaptación y resiliencia de la gestión gubernamental se ha puesto a prueba como nunca antes, evidenciando la necesidad de fortalecer los sistemas de gobernanza, mejorar la coordinación interinstitucional y fomentar la innovación en la prestación de servicios públicos. La pandemia ha revelado también la importancia de contar con marcos regulatorios flexibles y mecanismos de toma de decisiones rápidos que permitan una respuesta efectiva y oportuna ante situaciones de emergencia. Por tanto, la gestión gubernamental en Colombia se enfrenta a un reto sin precedentes debido a la pandemia de COVID-19, que ha

transformado radicalmente la forma en que se administran los recursos y se proporcionan los servicios públicos. Ante esta situación, es crucial que las instituciones gubernamentales adopten acciones rápidas y efectivas para enfrentar la crisis, proteger los intereses de la población y garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado en estos tiempos difíciles (Pont, 2021).

La gestión pública, como columna vertebral de la estructura estatal, se establece como la entidad responsable de administrar los fondos gubernamentales, que son esenciales para satisfacer las demandas y requerimientos de la sociedad, así como para mejorar el rendimiento de las instituciones gubernamentales en beneficio del bienestar colectivo. No obstante, esta tarea se ve continuamente desafiada por eventos imprevistos, como la pandemia, que ha requerido una adaptación rápida y efectiva para garantizar la correcta provisión de servicios básicos y la gestión transparente de los fondos públicos.

En el contexto particular de Colombia, la pandemia ha expuesto una serie de desafíos que han tenido un impacto considerable en la gestión pública del país. Uno de los más destacados ha sido la urgente necesidad de fortalecer el sistema sanitario para afrontar la emergencia de salud, proporcionándole los recursos necesarios y promoviendo tácticas eficaces para controlar la propagación del virus y atender a los afectados. Además, se ha demostrado la importancia vital de garantizar una gestión eficaz y transparente de los fondos estatales en medio de una coyuntura caracterizada por la crisis económica y social, donde la priorización de los gastos y la rendición de cuentas se convierten en aspectos de gran importancia para asegurar la confianza de los ciudadanos y el correcto desarrollo de las políticas públicas.

En este sentido, la gestión pública se enfrenta a un reto sin precedentes, que exige la implementación de acciones innovadoras y la adopción de enfoques multidisciplinarios para abordar las complejidades de la crisis actual. Es necesario potenciar la capacidad de respuesta del

Estado, promoviendo la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, así como impulsar la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en la búsqueda de soluciones integrales y sostenibles (Pont, 2021).

Por tanto, la pandemia ha sometido a prueba la capacidad de gestión de la administración pública en Colombia, evidenciando la necesidad de robustecer las instituciones estatales y fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado será posible superar los desafíos actuales y construir un futuro más resistente y equitativo para todos los ciudadanos.

En el marco colombiano, se han resaltado y señalado varios problemas de base que impactan la eficacia y rendimiento de la administración pública. Entre estos, sobresale una planificación estratégica insuficiente, que afecta directamente la habilidad de prever y manejar adecuadamente situaciones de crisis como la pandemia. Esta ausencia de anticipación estratégica puede resultar en una respuesta apresurada e inadecuada por parte de las autoridades del gobierno, intensificando así los efectos adversos de sucesos como el surgimiento de enfermedades.

Otro factor crucial es la existencia de directivos y líderes en posiciones públicas que no poseen las habilidades requeridas para manejar eficientemente las demandas complejas de la administración pública contemporánea. Esta falta de capacidades y conocimientos específicos puede llevar a decisiones incorrectas o menos que óptimas, así como a una ausencia de liderazgo efectivo en momentos críticos como una crisis de salud.

La suma de estos problemas de base ha contribuido de manera significativa a la ineficacia en la respuesta gubernamental frente a la pandemia de COVID-19 en Colombia. La ausencia de

una planificación estratégica robusta y de liderazgo apto ha generado confusión, descoordinación y, finalmente, desconfianza por parte de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Ahora, al observar hacia el futuro en el marco post-pandemia, se anticipan nuevos y complicados retos para la administración pública en Colombia. Se espera que las entidades del gobierno se ajusten rápidamente a un ambiente en constante transformación, que incluye variaciones en la economía, la emergencia de nuevos actores políticos y la necesidad de reformular de manera continua métodos y estrategias para atender las necesidades emergentes de la sociedad (Hernández y Agudelo, 2021).

Es esencial reconocer que los retos mencionados anteriormente representan solo una fracción de la realidad compleja que enfrenta la administración pública en Colombia. Esta realidad está en constante cambio y requiere un análisis continuo y la implementación de medidas efectivas para enfrentar tanto los desafíos actuales como los futuros. La habilidad de adaptación, el mejoramiento de la planificación estratégica y el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo son elementos fundamentales para abordar estos desafíos de manera efectiva y reconstruir la confianza en las instituciones públicas.

En última instancia, tanto Argentina como Colombia, se han encontrado con desafíos parecidos en su camino. Entre estos desafíos se incluyen la modernización de las instituciones gubernamentales, la digitalización de procesos, la creación de regulaciones para el teletrabajo y la mejora de la calidad de los servicios que el Estado proporciona a sus ciudadanos. Estos retos han destacado la relevancia de una administración pública eficiente para mejorar de manera integral las condiciones de vida de la población. En este sentido, se ha evidenciado que una buena gestión pública es fundamental para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Por lo

tanto, es crucial que se sigan haciendo esfuerzos para superar estos desafíos y seguir avanzando hacia un futuro mejor.

DISCUSIÓN.

La esencia de una administración pública competente radica en alcanzar la excelencia operativa, lo que conlleva un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos y garantiza la atención adecuada a sus necesidades comunitarias, promoviendo así el desarrollo sostenido del entorno social. Esta ideal demanda una transformación en la estructura estatal y en los procesos administrativos, enfocándose en el bienestar social del individuo y abordando los desafíos colectivos de manera activa, inclusiva y cooperativa. La orientación hacia el ciudadano es primordial, priorizando las interacciones jurídicas públicas que fomenten el progreso individual y la dignidad humana. Para lograr estos objetivos, es crucial prevenir conflictos utilizando estrategias que faciliten la armonización de intereses mediante el diálogo, la búsqueda de consensos y la implementación de métodos de negociación, arbitraje y mediación. Es vital instaurar un sistema administrativo que promueva la convivencia armónica, la colaboración mutua y la implicación directa de la población en las decisiones gubernamentales.

En el contexto argentino, la eficacia administrativa se sustenta en legislaciones clave como la Ley de Ética en la Función Pública (Ley N° 25.188) y la Ley 25.164 de 1999, que delinear un esquema normativo exhaustivo para el servicio público. Estas disposiciones normativas son pilares para la transparencia, la justicia y la profesionalización del ámbito público, y fomentan un régimen disciplinario estricto junto con el aprendizaje continuo. Adicionalmente, el Decreto 891/2017 tiene como objetivo la simplificación de la gestión en el Sector Público Nacional, enfatizando la eficiencia, la transparencia y la atención al ciudadano mediante la modernización y la adopción de prácticas y tecnologías avanzadas.

Por su parte, en Colombia, si bien el derecho a una administración pública eficaz no se reconoce explícitamente como un derecho humano o fundamental, varias cláusulas constitucionales resaltan la necesidad de asegurar este derecho dentro del marco de un Estado social y de derecho. El marco jurídico colombiano se caracteriza por un conjunto de normativas cohesivas que procuran un gobierno efectivo, responsable y en evolución constante, esencial para honrar los principios de justicia, igualdad y participación ciudadana. Aunque no se declare explícitamente como un derecho fundamental, su relevancia se manifiesta en las disposiciones constitucionales que buscan garantizar un gobierno que satisfaga las expectativas y necesidades de la población en todo el territorio nacional.

En conclusión, tanto en Argentina como en Colombia, la administración pública eficiente se cimienta en un marco legal diseñado para asegurar la eficacia, la transparencia y la atención al ciudadano, impulsando la participación activa de la población en la gestión gubernamental y velando por la protección de sus derechos y necesidades. En ambos países se subraya la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la necesidad de una administración pública transparente, eficiente y centrada en el bienestar del ciudadano. Se reconoce, además, la relevancia de la capacitación continua y la incorporación de tecnologías de vanguardia para incrementar la eficiencia y la transparencia administrativa. El propósito final es asegurar que la administración pública responda a los intereses de los ciudadanos y contribuya al desarrollo sostenible de la comunidad.

De otro lado, la administración electrónica, también conocida como e-gestión o gobierno digital, es una estrategia innovadora que está revolucionando las estructuras gubernamentales a nivel mundial. ¿No es fascinante cómo su implementación ha mejorado la eficiencia, transparencia y accesibilidad de los servicios públicos, convirtiéndose en un pilar esencial para

una administración más efectiva y centrada en el ciudadano? En países como Argentina y Colombia, se han realizado esfuerzos significativos para impulsar esta transformación digital. Reconocen su potencial para mejorar la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, así como para fomentar la innovación y agilidad en los procedimientos administrativos.

Por ejemplo, en Argentina, la gestión digital ha avanzado notablemente con la implementación del Plan Nacional de Gobierno Digital, también conocido como Agenda Digital 2030. Este plan integral tiene como objetivo coordinar y fortalecer las acciones del Estado en el ámbito de las tecnologías digitales, promoviendo el desarrollo económico y la inclusión digital. Además, busca construir una administración pública eficaz, rápida y centrada en las necesidades de los ciudadanos. La promulgación de la Ley de Firma Digital ha sido un hito importante, ya que otorga validez legal a las transacciones realizadas en entornos digitales, proporcionando un sólido respaldo legal a las operaciones electrónicas.

Por otro lado, en Colombia, la administración electrónica ha progresado significativamente, respaldada por la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que establece directrices para la implementación de sistemas digitales en la gestión pública. Programas como el Gobierno en Línea han incentivado la digitalización de los servicios gubernamentales, mejorando la eficacia y transparencia en la administración pública. La creación de un portal único del Estado Colombiano ha simplificado el acceso a la información y los trámites, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo los principios democráticos en el país.

Es evidente que la gestión electrónica en Argentina y Colombia no solo ha mejorado la eficiencia administrativa y la calidad de los servicios públicos, sino que también ha fortalecido la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza del público en el gobierno. Al hacer que la

información gubernamental sea más accesible y comprensible, la gestión digital empodera a los ciudadanos y promueve una participación más activa en la sociedad y en el proceso democrático. Sin embargo, es crucial continuar avanzando en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas robustas, así como en la formación de los funcionarios públicos y la promoción de la cultura digital, para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la gestión digital y construir sociedades más inclusivas y eficientes en la era digital.

Ahora, en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19, tanto Argentina como Colombia han tenido que lidiar con retos inéditos en la administración pública. Argentina puso en marcha medidas de aislamiento y distanciamiento social para frenar la propagación del virus, lo que provocó una transformación significativa en las prácticas laborales, con un incremento notable del teletrabajo. Este cambio abrupto ha generado aspectos tanto beneficiosos como perjudiciales para los trabajadores, como se demostró en entrevistas a empleados de distintas áreas y organismos gubernamentales.

La crisis también ha resaltado la relevancia de salvaguardar los derechos humanos, en particular el derecho a la vida y a la salud. Además, ha enfatizado la necesidad de reforzar la soberanía científico-tecnológica para afrontar emergencias sanitarias y otros retos globales. En este sentido, la inversión en investigación, desarrollo e innovación se ha convertido en esencial, al igual que la digitalización en la gestión pública para asegurar la continuidad de los servicios básicos.

En Colombia, la pandemia ha generado una presión adicional sobre las instituciones gubernamentales para asegurar la continuidad de los servicios básicos, proteger la salud de la población y atenuar los impactos económicos negativos. Esto ha requerido una adaptación sin

precedentes en la forma en que se gestionan los recursos y se ofrecen los servicios públicos, así como una mayor colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil.

Ambos países han afrontado retos parecidos, como la necesidad de mejorar la planificación estratégica y el liderazgo en la administración pública. La pandemia ha destacado la importancia de una gestión pública eficaz para mejorar las condiciones de vida de la población y ha subrayado la necesidad de seguir progresando hacia un futuro mejor mediante la superación de estos retos.

CONCLUSIONES

En primer lugar, es esencial subrayar que tanto Argentina como Colombia afrontaron retos considerables en la administración pública durante la pandemia de COVID-19. Ambas naciones tuvieron que ajustarse rápidamente a nuevas circunstancias, implementando acciones extraordinarias para salvaguardar la salud pública y preservar la estabilidad económica. En este escenario, la habilidad de reacción y la eficiencia de la administración pública fueron examinadas, mostrando tanto virtudes como falencias en sus respectivos sistemas. Uno de los progresos más notables en ambos países fue la rápida implementación de soluciones tecnológicas para la gestión administrativa. La administración digital surgió como un recurso esencial para mantener la continuidad de los servicios públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y procedimientos gubernamentales. En este aspecto, tanto Argentina como Colombia progresaron en la digitalización de procesos administrativos, fomentando la transparencia, la eficacia y la participación ciudadana.

Sin embargo, a pesar de los progresos en términos de administración digital, persisten retos considerables en ambos países. En Argentina, por ejemplo, la brecha digital y la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación representan barreras significativas para asegurar la inclusión y la equidad en la prestación de servicios públicos. En Colombia, por otro lado, aunque se han implementado varias iniciativas para promover la digitalización, persisten desafíos relacionados con la seguridad cibernética y la protección de datos personales. Otro punto importante a tener en cuenta es la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y la profesionalización de los funcionarios públicos en ambos países. La complejidad de los retos contemporáneos requiere una administración pública robusta, capaz de anticipar y gestionar eficientemente crisis como la pandemia de COVID-19. En

este sentido, es esencial fomentar la formación continua, la meritocracia y la ética en el servicio público, así como garantizar la autonomía y la independencia de las instituciones encargadas de la administración.

Por tanto, el análisis de la administración pública en Argentina y Colombia durante la era de la pandemia y la administración electrónica hasta el año 2023 muestra tantos avances significativos como desafíos constantes. Aunque la digitalización ha proporcionado herramientas valiosas para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública, es necesario abordar de manera integral las brechas estructurales y fortalecer las capacidades institucionales para garantizar un servicio público de calidad, inclusivo y orientado al bienestar de la ciudadanía.

REFERENCIAS

- Amado, J. (2021). La administración electrónica y sus repercusiones en la contratación pública. Revista digital de derecho administrativo.
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/6665/9655>
- Arcilla, L., y López, M. (2019). El derecho humano a una buena administración pública en México y Colombia. Inciso, 21, 41-57. <https://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/841/1461>
- Correa, A. (2019). La buena administración como principio jurídico: una aproximación conceptual. Revista Derechos en Accion. 4(10), 110-160.
<https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/6718/6818>
- Decreto 891/17, noviembre 2, 2017. Administración pública nacional. (Argentina). Obtenido el 08 de abril de 2024. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-891-2017-285796>
- Escobar, J. (2022). Características esenciales del Gobierno Digital en Colombia [Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia]. Repositorio institucional.
<https://hdl.handle.net/10983/27275>
- Gobierno de Argentina. (2018). El Gobierno presentó la nueva Agenda Digital 2030.
<https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-presento-la-nueva-agenda-digital-2030>
- Gobierno de Argentina. (S.f). Portal oficial del Estado argentino.
<https://www.argentina.gob.ar/acerca#:~:text=Argentina.gob.ar%20es%20el%20portal%20oficial%20del%20Estado%20argentino.>
- Grau, L. (2021). La buena administración en la contratación pública en Colombia: más allá de la apertura de datos [Trabajo de grado, Universidad colegio mayor de nuestra señora del rosario]. Repositorio institucional. <https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/ea117714-c3ef-4c3b-88ef-63f2e412e10c/content>

Hernández, A. y Agudelo, S. (2021). La pandemia de COVID-19 en Colombia y los desafíos de la respuesta sanitaria. *Revista Gerencia y Políticas de Salud*, 20, 1-6.

<https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/RGPS/20%20%282021%29/54566349019/>

Jara, M. (2019). La ley de firma digital en argentina. Análisis del marco normativo nacional y sus problemáticas. *Ratio Iuris. Revista de Derecho Privado*, 7 (2), 158-194,

<https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/ratioiurisB/article/view/732/662>

Ley 1755/15, junio 30, 2015. Diario Oficial. [D.O.]: 49559. (Colombia).Obtenido el 08 de abril de 2024.

http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html

Ley 25.164/99, septiembre 15, 1999. (Argentina).Obtenido el 08 de abril de 2024.

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25164-60458>

Ley 25.188/13, mayo, 2013. (Argentina). Obtenido el 08 de abril de 2024.

<https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-25188-etica-en-el-ejercicio-de-la-funcion-publica-de-argentina#:~:text=Ley%2025.188%20Ética%20en%20el%20ejercicio%20de%20la%20función%20pública%20de%20Argentina,-Objeto&text=La%20presente%20ley%20de%20ética,pública%20en%20todos%20sus%20niveles>

Objeto&text=La%20presente%20ley%20de%20ética,pública%20en%20todos%20sus%20niveles.

s.

Ley 25.506/14, noviembre 14, 2001. Diario Oficial. [D.O.]: 29796. (Argentina).Obtenido el 08 de abril de 2024. https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2001/Ley_25506.PDF

Pardini, A. (2016). La firma digital Algunas particularidades a observar para su implementación.

Universidad

Austral.<https://rii.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/1549/La%20firma%20digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Pont, J. (2021). Administración y Estado en el contexto post Covid-19: ¿Hacia un nuevo tipo de vínculo? *Gestión y Análisis de Políticas Públicas*, (26), 33-47.
<https://www.redalyc.org/journal/2815/281567964003/html/>
- Ramírez, M. y Contreras, C. (2023). De la buena administración y el acceso a la información pública en Colombia [Trabajo de grado, Universidad de Cartagena]. Repositorio institucional.
<https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/17176>
- Sabatto, D. (2022). El trabajo en la Administración Pública Nacional durante la pandemia. Cuadernos Del INAP (CUINAP), 3(95), 9-65,
<https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/article/view/302>
- Tello, D. (2020). Implementación del Gobierno Electrónico en tres Municipios de Sexta Categoría en Colombia. Un estudio de caso [Trabajo de grado, Universidad Externado de Colombia]. Repositorio institucional. <https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/06616808-98c0-4475-943c-2f0a6a192379/content>
- Vicente, M. y Babino, E. (2023). La Administración Pos Pandemia. Nulán.
<https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/3907/1/vicente-babino-2023.pdf>